

10 CAS

Un balance del ciclo progresivo en Latinoamérica - Eric Toussaint

1. Luces y sombras en la Venezuela bolivariana (extracto) – Eric Toussaint (2009)
2. Venezuela desde adentro: siete claves para entender la crisis actual – Emiliano Terán Mantovani (2017)
3. ¿Fin de ciclo? Los movimientos populares, la crisis de los “progresismos” gubernamentales y las alternativas ecosocialistas – Franck Gaudichaud (2015)
4. Ante la crisis social y política nicaragüense – ¡Solidaridad con las reivindicaciones populares y contra la represión orteguista! – Declaración del Buró Ejecutivo de la IV Internacional (2018)



Luces y sombras en la Venezuela bolivariana (extracto)

11 de octubre de 2009 por Eric Toussaint

La situación política, social y económica en Venezuela sufre una gran transformación desde el fracaso de la reforma constitucional de diciembre de 2007, que constituyó una advertencia para el gobierno de Hugo Chávez. [1]

(...)

Las paradojas de la economía venezolana: el sector capitalista se desarrolla con más rapidez que el sector público y controla aún muy ampliamente la economía, a pesar de las nacionalizaciones

El peso del sector privado (ampliamente dominado por el sector capitalista) [17] en el producto interior de Venezuela pasó del 64,7 % en 1998 (en vísperas de la elección de Chávez como presidente) al 70,9 % en el tercer trimestre del 2008. [18] Aunque el gobierno ha nacionalizado un número significativo de empresas de gran tamaño en los sectores de la electricidad, de las telecomunicaciones, de la siderurgia, de la agroalimentación, del cemento y de la banca, el sector capitalista tuvo un crecimiento mayor que el público, lo cual explica que su peso relativo en el PIB haya aumentado (véase más arriba), mientras que el del sector público bajaba (del 34,8 % en 1998 al 29,1 % en el 2008). [19] Esto se explica, en particular, por el tipo de utilización de la renta petrolera. Una aplastante mayoría de los recursos del Estado venezolano provienen de la exportación de petróleo. El gobierno emplea masivamente estos recursos para mejorar las condiciones de vida de la mayoría pobre de la población (así como de otros sectores de ingresos medios) en los ámbitos de la salud (con resultados impresionantes), de la educación (*idem*), de la provisión de productos básicos a precios comprimidos a través de los canales de distribución y de comercialización Mercal [20] y Pdval [21] (alimentos y otros bienes de primera necesidad para las familias), de la construcción de viviendas, de la construcción de infraestructuras y de medios de comunicación colectiva (metro, tren), del aumento de los salarios en la función pública, del aumento del número de becas y rentas sociales, sin olvidar los gastos en los sectores de la cultura y los deportes, y la distribución de subvenciones importantes a las cooperativas y los consejos comunales.

El resultado es indiscutiblemente positivo: la proporción de venezolanos que viven por debajo del umbral de la pobreza se ha reducido a la mitad

entre el 2003 y el 2008, pasando del 62,1 % al 31,5 % de la población. En cuanto a las personas en situación de pobreza extrema, la proporción se redujo dos tercios, pasando del 29 % en el 2003 al 9,1 % en el 2008. [22] El analfabetismo tuvo una fuerte disminución, el nivel de formación aumentó, el acceso a la atención sanitaria gratuita tuvo un alto aumento, el consumo de masa aumentó...

Pero el sector capitalista se beneficia también largamente de estos gastos gubernamentales, pues es quien domina, de lejos, la banca, el comercio y la industria alimentaria. El dinero suplementario que llega al pueblo proveniente de los gastos gubernamentales acaba concentrándose en los bolsillos de los capitalistas, pues es en los bancos capitalistas donde los particulares (y también las cooperativas, los consejos comunales, las municipalidades y otros numerosos entes públicos) depositan su dinero. Son bancos capitalistas los que emiten la moneda de crédito al consumo bajo la forma de tarjetas de crédito y que mantienen una parte creciente del consumo (cobrando unas elevadas tasas de interés). Son las empresas capitalistas de la industria alimentaria las que producen o comercializan la mayor parte de los productos alimentarios consumidos por las masas. Son las empresas capitalistas importadoras las que hacen llegar del exterior —a un tipo de cambio oficial muy favorable— los variadísimos productos importados que consumen los venezolanos (por otra parte, estas firmas organizan un comercio import-export fraudulento masivo entre Venezuela y Colombia que hace perder ingresos al Estado aumentando los beneficios capitalistas). Son las cadenas privadas de grandes superficies que aún dominan el comercio, aun si Mercal y Pdval tienen un papel no despreciable en la distribución de productos de base. Cuando el Estado nacionaliza empresas privadas pertenecientes al capital nacional, es a capitalistas locales a los que paga indemnizaciones de recompra.

En síntesis, el sector

capitalista sigue **absorbiendo** la mayor parte de los gastos que hace el Estado a favor de la población pobre o de ingresos medios.

Según un estudio de Mark Weisbrot y Luis Sandoval, [23] cuyo contenido es, por otra parte, muy favorable al gobierno de Chávez, el sector financiero privado ha tenido un crecimiento del 37,9 % en el 2004, del 34,6 % en el 2005 y del 39,2 % en el 2006, mientras que el sector público (todos los sectores juntos) no creció más que el 12,5 % en el 2004, el 4,1 % en el 2005 y el 2,9 %

en el 2006.

Como ha escrito Víctor Álvarez: «*En el anterior periodo gubernamental del presidente Chávez (2000-2006), la mayoría de los incentivos financieros, fiscales, cambiarios, compras públicas, asistencia técnica, etc. fueron dirigidos al aparato productivo existente, conformado fundamentalmente por empresas mercantiles, las cuales reproducen el modo de producción capitalista que, paradójicamente, es el que se quiere superar y trascender.*»

Estamos muy lejos de las afirmaciones de la prensa dominante, que ve en la gestión de Hugo Chávez una estatización galopante de la economía venezolana.

Un problema adicional, antes mencionado, se debe a una política de sobrevaloración de la moneda venezolana con respecto al dólar. Esto requiere una explicación. Desde el año 2003, las empresas que quieren importar mercaderías y servicios deben comprar los dólares a una administración del Estado llamada CADIVI. Esta medida, tomada para luchar contra la fuga de capitales, es útil. El problema es que el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar sobrevalora el primero. En efecto, esto agrava un comportamiento perverso: para un capitalista que dispone de una suma importante de bolívares, es más rentable cambiarlos por dólares, que compra al Estado a bajo precio, y comprar bienes en Estados Unidos o en otra parte, que producirlos en el país. Por lo tanto, la política del bolívar sobrevaluado inhibe la inversión productiva y favorece la actividad comercial volcada a la importación frenética de mercancías [24] y su venta en las grandes redes privadas de distribución. De hecho, esta importación masiva está subvencionada por el Estado, dado que éste vende al sector privado a bajo precio unos dólares acumulados gracias a la exportación de petróleo. Así mismo, habría que analizar el papel de esta política del bolívar sobrevaluado y del alto nivel de importaciones sobre la tasa de *inflación*, particularmente alta en estos últimos años. Una inflación que se come los aumentos salariales dispuestos por el gobierno.

Un ejemplo de la naturaleza viciosa de esta política cambiaría y de los regalos que el gobierno hace a los bancos privados. El Estado venezolano compró títulos de la *deuda* emitidos por Argentina en 2004-2005. El problema es que vendió una parte de estos títulos, denominados en dólares, a los bancos privados. Éstos los pagaron en bolívares al tipo de cambio oficial sobrevaluado. ¿Qué hicieron con ellos algunos (o muchos) compradores? Los vendieron en Estados Unidos o

en otra parte en dólares. Esto les permitió eludir el control sobre los movimientos de salida de capitales que ejerce el Estado venezolano. Es decir, oficialmente no exportaron capitales, no hicieron más que sacar del país títulos de la deuda argentina. Otras maniobras astutas de los bancos han podido brindarles jugosos beneficios, sería largo de detallar.

En conclusión, aunque el Estado trata de poner en marcha una política de desarrollo endógeno (esto es, volcado a la satisfacción de la demanda interna mediante la producción cada vez mayor dentro del país), la manera de operar la redistribución de la renta petrolera tiende a reforzar el sector capitalista y su comportamiento importador. En su intervención en el encuentro de intelectuales organizado por el CIM, el escritor y jurista Luis Britto resumió así la situación: «*Vivimos en una sociedad dual y yo digo en una fábula que hice que cuando uno intenta hacer un sistema mixto con gallinas y con zorros en un mismo gallinero, a la semana sólo quedarán zorros y además se comerán al granjero.*» [25]

Algunas pistas para avanzar hacia una transición al socialismo del siglo xxi en Venezuela [26]

Una de las soluciones que se pueden poner en marcha a fin de que el Estado pueda recuperar (en lugar del actual sistema bancario privado) una parte sustancial de lo que distribuye (o destina) consiste en transferir al sector público (nacionalizar) la mayor parte o la totalidad del **sector bancario**

capitalista venezolano. [27] Recuperando de este modo una parte de lo que distribuye (a partir de la renta petrolera), podrá reinvertirla en la economía en forma de gastos sociales o de inversiones productivas, a fin de crear un círculo virtuoso de acumulación y de desarrollo de un sector público de la economía, así como de otras formas de propiedad que se ha de apoyar y reforzar (pequeña propiedad privada, propiedad cooperativa, formas tradicionales de propiedad de las comunidades indígenas, etc.)

Una segunda medida podría consistir en la estatización del **comercio exterior**, a fin de evitar que una gran parte de los beneficios del mismo sea desviada hacia la acumulación capitalista o hacia el exterior vía la fuga de capitales. Habría que establecer así mismo una serie de estímulos de diferentes tipos (impuestos, subvenciones, prioridades en las compras del Estado, etc.) a favor del sector no capitalista de la economía (naturalmente, incluida la pequeña propiedad

privada). [28]

Pero lo que es absolutamente esencial es establecer unos mecanismos para evitar dos grandes escollos:

1) **El monopolio de las decisiones por la burocracia del Estado**, y 2) **la emergencia de una nueva burguesía desde las entrañas del chavismo**, lo que ya se denomina popularmente la «boliburguesía» (de burguesía bolivariana, la parte de los dirigentes chavistas que se benefician de sus funciones acumulando un capital). [29] Entre estos mecanismos citemos: fijación de un límite al abanico de salarios (por ejemplo, entre 1 y 6) reduciendo los más altos y aumentando el mínimo, así como los salarios medios; la obligación de los mandatarios y altos funcionarios de presentar una declaración anual de los ingresos globales (salarios, remuneraciones y otros ingresos) y del patrimonio (pues la acumulación de capital por los burócratas pasa a menudo por cobros bajo mano que aparecen en el patrimonio); la obligación de los ciudadanos de declarar las diferentes cuentas bancarias que tengan en el país y en el exterior (levantamiento del secreto bancario); un fuerte aumento de la progresividad del impuesto sobre los ingresos.

Un remedio indispensable, y ciertamente el más eficaz, es la aplicación de una política de control obrero y de control ciudadano de la contabilidad y la gestión de las empresas y de las instituciones públicas. Esto permite imponer la transparencia de la gestión (a fin de evitar los desvíos, el derroche, e empleo de los recursos de las empresas e instituciones en proyectos que no se justifiquen desde un punto de vista social, ambiental, etc.) mediante una política de auditoría integral, en la cual deben participar activamente los trabajadores y los usuarios de los servicios. Esto implica también la dotación de los organismos de control, y de las personas que forman parte de éstos, de la formación necesaria para pasar del control a la autogestión de las empresas (manteniendo siempre un control externo). Toda esta batalla por el control obrero, por el control ciudadano (control de usuario), por la autogestión forma parte de la construcción de órganos de poder popular. Habría que encontrar la forma adecuada para que el desarrollo de estos órganos no se limite a una visión fragmentada, lo cual plantea el problema de la construcción de una federación nacional de órganos de control y de poder popular. Por otra parte, es también vital mejorar la formación de los gestores de las empresas públicas. Pues las nacionalizaciones requieren la creación de una reserva de reclutamiento de cuadros de alto nivel técnico y de una sólida

formación política y social, que también tengan una formación ética. En efecto, para acelerar el ritmo de las nacionalizaciones, es necesario crear al mismo tiempo una reserva de cuadros y desarrollar, como se ha dicho más arriba, una política de control obrero y ciudadano. En caso contrario, se corre el riesgo de crear empresas públicas ineficaces, cuando no corruptas.

Algunas observaciones suplementarias concernientes a Venezuela

Reducir la dependencia de los hidrocarburos y de Estados Unidos

Uno de los desafíos a los que se enfrentaron varios gobiernos anteriores, así como el de Hugo Chávez, es la diversificación del aparato productivo a fin de salir de una extrema dependencia de los hidrocarburos (demás está decir que esto vale para la mayoría de los grandes exportadores de petróleo). Es por esto por lo que, en los años 60, se creó una empresa como SIDOR. Más tarde, en el curso de los años 80 y 90, los gobiernos neoliberales [30] privatizaron muchas empresas públicas, como SIDOR, y recurrieron a las inversiones extranjeras para diversificar la economía. Fue un fracaso.

En estos últimos años, el gobierno de Hugo Chávez trató a su manera de diversificar el aparato productivo con las siguientes medidas:

1. Desarrollo y refuerzo de un polo siderúrgico y metalúrgico aplicando una política de sustitución de importaciones (por ejemplo, Venezuela producirá los tubos necesarios para sus oleoductos, que hasta ahora son importados; con ayuda de China, ampliará la red y fabricará material rodante);
2. Apoyo a la producción agrícola local para acercarse tanto como se pueda a una situación de soberanía alimentaria, cuando cerca del 90 % de los alimentos consumidos en el país son importados (herencia de décadas de empleo de los recursos petroleros para importar todo lo que Venezuela necesitaba);
3. Desarrollo de la industria petroquímica;
4. Mejora de la producción y de la distribución de electricidad, obtenida en su mayor parte a partir de la energía hidráulica (felizmente, no a partir del petróleo). En este aspecto, al contrario de las intenciones oficiales, hay que evitar lanzarse a la producción de electricidad por centrales nucleares;

5. Nacionalización de la industria cementera a fin de desarrollar la política de construcción de viviendas.

En cuanto a la voluntad de reducir la dependencia del petróleo, Venezuela trata también de disminuir la parte de sus exportaciones destinadas a Estados Unidos, [31] su principal comprador de hidrocarburos, intentando reforzar las ventas a China (según fuentes gubernamentales, se espera que este país compre tanto como Estados Unidos de aquí al 2014, una meta que parece difícil alcanzar).

Política agraria

Se ha llevado a cabo una reforma agraria, [32] las cooperativas y las pequeñas explotaciones agrícolas reciben importantes subvenciones, pero se parte de una situación muy difícil. El peso de la agricultura en el PIB es muy débil [33] y, aparte de excepciones muy importantes (como, por ejemplo, las regiones de grandes huertas de los Andes), [34] Venezuela es uno de los países en los que el campesinado está considerablemente debilitado debido a la aplicación durante décadas del modelo importador.

¿Cómo reconstituir un campesinado que asegure la soberanía alimentaria de una población que llegará a los 30 millones en los próximos años? Hay que reconocer que es muy difícil resolver el problema. Para ello, es necesario que el Estado ponga en marcha una amplia batería de medidas de estímulo, entre las cuales: una mejora sustancial de la calidad de los servicios públicos en zonas rurales para reducir el éxodo rural; el aporte de una ayuda a diferentes niveles a la agricultura familiar y otras formas tradicionales de producción agrícola, sin ejercer una presión exagerada a favor de las cooperativas; [35] el desarrollo de una red pública para la comercialización de los productos de los campesinos, que asegure la estabilidad de la salida y precios suficientemente altos para estimularlos y ponerlos fuera del alcance de las garras de las redes privadas, que imponen su precio a los productores, y asegurarles unos márgenes de *beneficio* mucho más altos. [36] Michael Lebowitz ha hecho una propuesta concernientes a la política agrícola en Venezuela que se tendría que poner en práctica para mejorar la situación: «*Teniendo en cuenta el contrabando existente debido a un bolívar sobrevaluado y el desvío de mercancía vía mercado negro, no es apropiado subsidiar a través del suministro gratis de insumos, tales como medios de producción o subsidios monetarios directos, a la producción*

agrícola (excepto en el caso de que se establezcan nuevas instalaciones productivas). ¿Por qué? Porque dadas las circunstancias, no hay ningún control que asegure que los productos se dirijan al lugar apropiado —sobre todo con la falta de mecanismos de seguimiento y vigilancia que involucran costos de transacción muy importantes.

Por lo tanto, para asegurar que los subsidios resulten en un verdadero incremento de alimentos en el mercado nacional y a precios apropiados, la mejor forma de subsidio es a través de una agencia del Estado que compre los productos a un precio determinado. Esta agencia estatal puede otorgar un precio a los productores que estimule la producción y luego puede hacer que estos artículos sean vendidos a la población en general través de la red de Mercal a precios más bajos que lo que pagó a los productores.» [37]

Política del gobierno venezolano en materia de endeudamiento

El peso de la deuda pública con respecto al PIB ha bajado en el curso de los últimos años, pero hay que señalar que el gobierno de Hugo Chávez sigue sin ordenar la realización de una auditoría integral de la deuda pública a pesar de que se comprometió a hacerlo en varias ocasiones. [38] Una parte de la deuda, que Venezuela sigue pagando, fue heredada del régimen anterior (la IV República) y está muy tachada de fraude. Pero no es necesario atenerse a las deudas contraídas por los gobiernos anteriores a la V República, instituida en 1999. En efecto, es muy importante para el gobierno que demuestre a la ciudadanía que está dispuesto a auditar su propia política de endeudamiento.

Además, no se puede dejar interrogarse sobre la oportunidad de contraer nuevas deudas en un momento en el que el precio del barril de petróleo era elevado y en el que no faltaba liquidez. Sin embargo, PDVSA se endeudó por un monto de 12.000 millones de dólares en el 2006 emitiendo títulos en los mercados financieros internacionales. ¿Cómo justificar esta medida que no fue discutida en la Asamblea nacional? Con un precio del barril en baja desde julio de 2008 (aun si su nivel actual —entre 50 y 70 dólares el barril en el verano del 2009— pone a Venezuela fuera de peligro inmediato), los desembolsos que debe efectuar PDVSA ¿no recargan su presupuesto? ¿No reducen exageradamente su liquidez? ¿Por qué endeudarse y transferir intereses a los mercados financieros privados internacionales (o nacionales), si se dispone de suficiente liquidez para no tener que recurrir al empréstito?

Lamentablemente, estas preguntas siguen sin respuesta.

Hay que destacar que Hugo Chávez pone el acento en el desarrollo endógeno del país, que define como «autocentrado, basado en los recursos propios y consubstancial del retorno con fuerza a la escala nacional». Reducir el endeudamiento exterior de PDVSA tendría que constituir una aplicación de esta definición tan interesante.

La defensa de Venezuela frente al peligro de agresión exterior y a la amenaza de los paramilitares colombianos en territorio venezolano

Ante la agresividad de Estados Unidos y de Colombia (las fuerzas armadas colombianas son muy superiores a la venezolanas y es público y notorio que paramilitares colombianos ya están presentes en territorio venezolano, por ejemplo, en el estado de Tachira, al suroeste del país) la población es cada vez más consciente de la necesidad de prepararse para afrontar posibles ataques.

Hay que recordar que, para hacer frente al *putsch* del 11 de abril de 2002, el pueblo no disponía de armas. Fueron centenares de miles de personas desarmadas las que rodearon los cuarteles, el palacio presidencial, las radios y la TV cómplices del golpe. Muchos militantes no quieren que esta situación se repita, tanto más cuando los enemigos del proceso han aprendido la lección del fracaso del golpe.

El general Alberto Müller Rojas, miembro de la dirección del PSUV, dice en un editorial de *A la Izquierda*, revista del partido, que hay que imaginar «una agresión armada [...] en la cual nuestro pueblo tendría que enfrentar fuerzas no sólo cuantitativamente mayores, sino cualitativamente superiores. Y habría un agravante. Las hostilidades contarían con el apoyo de factores de poder internos...». Más adelante agrega: «Y la respuesta de nuestra organización no puede ser otra que la promoción de un debate sobre el problema en el marco de las organizaciones populares.» [39]. Por su parte, Stalin Pérez Borge, dirigente de Marea Socialista y responsable sindical, escribe: «... la única respuesta es el pueblo en armas. Es necesario que nosotros, los trabajadores, nos incorporemos de inmediato a la Milicia Bolivariana para formar lo más pronto posible los batallones obreros.» [40]

Traducido por Raúl Quiroz

Notas

[1] El «no» en el referéndum constitucional promovido por Chávez el 2 de diciembre de 2007 recogió el 51 % de los votos contra el 49 % del «sí». Fue el único fracaso «electoral» de Chávez entre 1998 y 2009. Véase Eric Toussaint, «Transformar el fracaso del 2 de diciembre de 2007 en una potente palanca para impulsar el proceso en curso en la Venezuela de Hugo Chávez», <http://www.cadtm.org/Transformar-el-fracaso-del-2-de>

(...) [17] La parte de la economía social en el seno del sector privado es muy débil, por ejemplo, del 0,5 % del producto interior bruto en 1998 pasó al 1,6 % a fines del 2008. Sobre un total de 11.692.071 personas activas a finales del 2008, sólo 201.773 trabajaban en las cooperativas de la economía social. Es decir, apenas el 1,7 %.

[18] Véase Víctor Álvarez, «La transformación del modelo productivo venezolano: balance de diez años de gobierno», *Revista La Comuna* n° 0, pp. 37 à 55. Víctor Álvarez fue ministro de Industrias de base del gobierno de Chávez, de enero de 2006 a agosto de 2007.

[19] Hay que añadir un matiz importante: hasta el 2002, aunque pública, PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) había evolucionado hacia una gestión favorable al sector privado. Por lo demás, una gran parte de sus ingresos se declaraban y pagaban impuestos en Estados Unidos. Las medidas tomadas por el gobierno de Chávez a partir del 2002 permitieron recuperar la gestión de la empresa por el Estado, lo que se tradujo en un fuerte aumento de ingresos, que se destinaron a continuación a las políticas sociales.

[20] La Misión Mercal (MERCado de ALimentos) es uno de los programas sociales incentivados por el gobierno venezolano. Creada oficialmente el 24 de abril de 2003, la Misión Mercal está destinada al sector alimentario, dependiente del Ministerio de la Alimentación. El programa consiste en construir y dotar almacenes y supermercados con alimentos y otros productos de primera necesidad a bajos precios para que sean accesibles a la población más necesitada. Los alimentos están subvencionados y llegan a los estantes sin intermediarios, de manera que los precios ofrecidos suelen tener un descuento de entre el 30 y el 45 por ciento de los observados en las otras cadenas de distribución. http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_Mercal

[21] Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), creada en enero de 2008 http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=117377

[22] Citado por Víctor Álvarez.

[23] Véase Mark Weisbrot y Luis Sandoval, *La Economía venezolana en tiempos de Chávez*, Center for Economic and Policy Research, Washington, 2007, www.cepr.net

[24] Una anécdota personal: me quedé estupefacto al ver, a finales de noviembre de 2006, en los barrios de clase media de Caracas, puntos de venta de miles de árboles de navidad importados de Canadá. Los comercios también vendían, en gran cantidad, sistemas para esparcir nieve química sobre los pinos. Hay que tener en cuenta que para esas fechas la temperatura media en Caracas es de más de 20 grados. El bolívar sobrevaluado hace absolutamente rentable la importación masiva de los pinos provenientes del gran Norte. Es verdad que Hugo Chávez critica este modelo de importación sistemática, tanto más, —dice—, cuanto que esto corresponde a unos hábitos culturales (por ejemplo, el papá Noel) también importados y adoptados en detrimento de las tradiciones locales.

[25] Véase http://www.cadtm.org/IMG/article_PDF/article_a4492.pdf y Martha Harnecker, «Selección de las opiniones más destacadas de los intelectuales reunidos en el CIM», <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=88131>, que presenta extractos de diferentes intervenciones realizadas en el curso del encuentro de intelectuales organizado por el CIM a principios de junio de 2009.

[26] Las recomendaciones que siguen son válidas también para Ecuador y Bolivia (cuya evolución reciente se analizará más adelante), aunque la situación en Venezuela es más favorable, desde muchos puntos de vista, para su aplicación.

[27] Ha tomado una primera medida en ese sentido en el 2009 al nacionalizar el Banco de Venezuela.

[28] En este sentido, véanse las propuestas de Víctor Álvarez en la parte final del documento antes citado.

[29] Roberto López, profesor en la universidad de Zulia, critica un proceso «en el cual sectores empresariales privados, que no son necesariamente los que están tratando de derrocar al gobierno, sino los sectores empresariales privados aliados a la burocracia bolivariana, que se han hecho multimillonarios en este período. Habría que hacer un análisis de los grupos empresariales y de la relación con los haberes económicos de muchos dirigentes y próceres del proceso. Pareciera que hay una nueva burguesía bolivariana asociada a

sectores empresariales. Por ejemplo, un hecho que conozco casi directamente es el de las empresas contratistas que acaban de ser nacionalizadas, expropiadas en la Costa Oriental del Lago, donde prácticamente en todas esas empresas estaban empresarios que habían participado en el golpe, en el paro petrolero y todos estaban asociados con dirigentes del PSUV, con dirigentes de la revolución, con diputados, gobernadores bolivarianos, etc.»

Véase <http://www.aporrea.org/actualidad/n136767.html>

[30] Entre ellos, la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuando se aplicó en 1989 un plan de ajuste estructural impuesto por el FMI, que provocó la enorme sublevación popular del 27 de febrero de 1989, que fue sangrientamente reprimida. Pérez era por entonces vicepresidente de la Internacional Socialista.

[31] Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 1999 las exportaciones a Estados Unidos representaban el 47,36 % del total y las importaciones provenientes de este país representaban el 40,61 % del total. En el 2007, los porcentajes respectivos pasaron al 52,4% y al 25,8 %.

[32] Se recuperó 2.675.732 hectáreas pertenecientes a los grandes propietarios rurales (latifundistas) y se concedió a los campesinos títulos de propiedad agraria y títulos de adjudicación por un total de 1.862.247 hectáreas a finales del 2008.

[33] El sector agrícola representa apenas el 4,39 % del PIB, mientras que en Colombia llega al 12,1 % del PIB. La media en Latinoamérica es del 6,22 % del PIB.

[34] Véase Alexandra Angelaume y Jean Christian Talet, «Mutation maraîchère et accompagnement institutionnel dans les Andes vénézuéliennes (1950-2007) in Olivier Compagnon, Julien Rebotier y Sandrine Revet (bajo la dirección de), *Le Venezuela au-delà du mythe. Chavez, la démocratie, le changement social*, Editions de l'Atelier/Éditions Ouvrières, París, 2009, segunda parte, cap. 4.

[35] En efecto, el balance de la creación de muy numerosas cooperativas agrícolas (y otras) es particularmente moderada en Venezuela (como había sido el caso en una serie de países que dieron prioridad a las cooperativas con respecto a la explotación individual familiar).

[36] Como se ha visto, no son más que los pequeños productores europeos de leche los que se han enfrentado a este tipo de problema, que ha

provocad o movimientos de lucha en Francia, Bélgica y Alemania en 2008 y 2009.

[37] Michael Lebowitz, «De los subsidios agrícolas a la soberanía alimentaria», 2 de febrero de 2008,

[38] Hugo Chávez anunció el lanzamiento de una auditoría de la deuda con ocasión de un encuentro con un centenar de delegados de los movimientos sociales del mundo entero, en enero del 2006, al final de la 6ª edición del Foro Social Mundial, realizada de manera descentralizada en Caracas, Bamako y Karachi. El autor estuvo presente en dicha reunión, que por otra parte fue íntegramente transmitida en directo por la televisión pública. También se comprometió a finales del año 2008 en el marco de una reunión del ALBA.

[39] *A la Izquierda*, nº 19

[40] *Marea Socialista*, nº 21, 28 de julio de 2009.

Venezuela desde adentro: siete claves para entender la crisis actual

22 de mayo de 2017 por Emiliano Terán Mantovani

No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueísmo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de *acción* e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la

defensa de los *bienes comunes*. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.

Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la

apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.

Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movido. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para «combatir el hampa», los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina, haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA, la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro) u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo,

confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquistó aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de 'sálvese quien pueda' en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados 'sindicatos mineros' que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905.

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) – los efectos de la llamada 'Enfermedad Holandesa' – lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la *OPEP*) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo

y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del *Fondo Monetario Internacional*.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; *devaluación* de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de *deuda* externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.

Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms² de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo.

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un 'neoliberalismo mutante', en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la 'vuelta del neoliberalismo'. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza.

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la 'Mesa de la Unidad Democrática' (MUD) es neoliberal

La derechista 'Mesa de la Unidad Democrática' (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar 'uribistas'–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la 'ideologización' por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.

Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los 'Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)'. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso) y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

¿Fin de ciclo? Los movimientos populares, la crisis de los “progresismos” gubernamentales y las alternativas ecosocialistas

5 de noviembre de 2015 por Franck Gaudichaud

A más de 40 años del golpe de Estado que derrotó a la vía chilena al socialismo y a 30 años de la fundación del mayor movimiento social del continente, el Movimiento de trabajadores rurales sin tierra (MST) de Brasil; a 20 años del grito zapatista ¡Ya basta! en Chiapas en contra del neoliberalismo y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a más de 15 años de la victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela (y transcurridos más de dos años desde su muerte), los pueblos indo-afro-nuestroamericanos y sus tentativas de construcción de gramáticas emancipadoras parecen encontrarse en un nuevo punto de inflexión. Un ciclo de mediana duración, social, político y económico parece agotarse paulatinamente, aunque de manera no uniforme, ni para nada lineal. Con sus avances reales (pero relativos), sus dificultades e importantes limitaciones, las experiencias de los diferentes y muy variados gobiernos “progresistas” de la región, sean procesos meramente de centro-izquierda, social-liberales, o -al contrario- nacional-populares más radicales, que se reclamen anti-imperialistas o se descalifiquen en los medios conservadores como “populistas”, sean revoluciones bolivarianas, ando-amazónicas o “ciudadanas” o simples recambios institucionales hacia el progresismo, estos procesos políticos parecen topar ante grandes problemáticas endógenas, fuertes poderes fácticos conservadores (nacionales como también globales) y no pocas indefiniciones o dilemas estratégicos no resueltos.

De gobiernos progresistas y posneoliberales

Sin lugar a duda, en los países donde se han consolidado varias y aplastantes victorias electorales de fuerzas de izquierda o antineoliberales, en particular en las naciones donde esas victorias son producto de años de luchas sociales y populares (como en Bolivia) o de una rápida politización-movilización de los de abajo (como en Venezuela), el Estado y sus regulaciones, el crecimiento económico interno, el combate a la pobreza extrema a través de programas específicos de redistribución y la institucionalización de nuevos servicios públicos han ido ganando terreno: una diferencia notable y ningún caso menospreciable con el ciclo infernal de las privatizaciones, fragmentación y la violencia de la desregulación capitalista neoliberal

de los años 90. Allí, apareció de nuevo la fuerza pública como ente regulador del mercado nacional, redistribuidor parcial de las rentas extractivas y de las riquezas del subsuelo hacia los y las más empobrecid@s, con efectos directos e inmediatos para millones de ciudadanos y ciudadanas, un proceso que explica en parte la solidez de la base social y electoral de estas experiencias hasta el día de hoy (y en algunos casos después de más de más de 10 años de gobierno). Por primera vez –desde hace décadas– varios gobiernos “posneoliberales”, comenzando por Bolivia, Ecuador y Venezuela, demostraron que sí es posible comenzar a retomar el control de los recursos naturales y, al mismo tiempo, hacer retroceder pobreza extrema y desigualdades sociales con reformas de inclusión política de amplios sectores populares, hasta el momento marginados del derecho de decidir, opinar y sobre todo participar. También volvió a surgir en los imaginarios geopolíticos continentales el sueño de Bolívar y las iniciativas de integración regional alternativa y cooperación entre los pueblos (como el ALBA-TCP), intentando recobrar espacio de soberanía nacional frente a las grandes potencias del Norte, al imperialismo militar y a las nuevas carabelas que son las firmas transnacionales o las órdenes unilaterales de las instituciones financieras mundiales.

En un momento en que el viejo mundo y los pueblos de la Unión Europea están sometidos a la dictadura financiera de la *Troika* (FMI, Comisión Europea y *Banco Central* Europeo) y en una profunda crisis económica, política e incluso moral, es importante subrayar la capacidad que han tenido varios movimientos populares y líderes de Nuestra América de resistir y comenzar a reconstruir multilateralismo, democratizar la democracia e incluso reinventar la política, con proyectos que se pensaron como alternativas para el siglo XXI. Cuando un país como Grecia intenta asomar la cabeza frente a los embates de la *deuda* y de las clases dominantes europeas, cuando muchos trabajadores, jóvenes y colectivos de esta parte del mundo buscan derroteros emancipadores, mucho se podría aprender de América Latina, de su traumática experiencia con el fundamentalismo capitalista neoliberal y de sus ensayos heroicos de contrarrestarlo desde el sur del sistema-mundo.

Los complejos caminos del anticapitalismo y del poder

No obstante, como lo declaraba a principios del 2015 el teólogo y sociólogo François Houtart, secretario ejecutivo del Foro Mundial de Alternativas, el desafío fundamental –en particular para países que más despertaron expectativas de cambio– sigue siendo la definición de caminos de transición profunda hacia un nuevo paradigma civilizatorio poscapitalista. Es decir se trata de no sólo quedar atrapado en un objetivo de modernización posneoliberal y menos aún dentro de un neodesarrollismo asistencialista o un intento de reacomodo entre crecimiento nacional, burguesías regionales y capitales extranjeros: significa apuntar a una transformación de las relaciones sociales de producción y de las formas de propiedad. Sin duda, la tarea es gigantesca y ardua. En esta perspectiva y en este momento histórico, a pesar de los avances democráticos conquistados [1] con sangre y sudor, afloran las múltiples tensiones y límites de los diversos progresismos latinoamericanos o, más bien, del periodo abierto a principios de los años 2000 en la lucha contra la hegemonía neoliberal. Un intelectual -hoy estadista- como Álvaro García Linera presenta estas tensiones (en particular entre movimientos y gobiernos) como potencialmente “creativas” y “revolucionarias”, como experiencias necesarias para avanzar gradualmente en dirección de un “socialismo comunitario” [2], tomando en cuenta la relación de fuerzas geopolíticas, políticas y sociales realmente existentes (y, de paso, despreciando sin mucho argumentos como “infantiles” a todas críticas que provengan de su izquierda...). Dentro de esta orientación, la conquista electoral del gobierno por fuerzas nacional-populares es pensada como una respuesta democrática – y “concreta”- a la emergencia plebeya de los años 90-2000, y el Estado es considerado como instrumento esencial de “administración de lo común” frente al reino de la ley del valor y la disolución anómica neoliberal. En esta defensa de lo conquistado desde los diferentes progresismos gubernamentales, a veces analizados como un todo homogéneo, encontramos también la pluma de intelectuales de renombre como Emir Sader o de la educadora popular y socióloga chilena Marta Harnecker. [3] Al contrario, no pocos militantes de terreno, algunos movimientos y analistas críticos de horizontes políticos plurales (como Alberto Acosta y Natalia Sierra en Ecuador, Hugo Blanco en Perú, Edgardo Lander en Venezuela, Maristella Svampa en Argentina o Massimo Modenesi en México, entre otros) insisten en la dimensión cada vez más “conservadora” de las políticas estatales del

progresismo o nacionalismo posneoliberal (desde Uruguay hasta Nicaragua pasando por Argentina [4]) e incluso en su carácter de “revolución pasiva” (en el sentido de Gramsci): o sea una transformación “en las alturas” que modificaría efectivamente los espacios políticos, las políticas públicas y la relación Estado-sociedad, pero que va integrando -e in fine neutralizando- la irrupción de las y los de abajo en las redes de la institucionalidad, organizando un brusco reacomodo en el seno de las clases dominantes y del sistema de dominación, frenando la capacidad de autoorganización y control desde debajo de los pueblos movilizados. [5] Visto así la “captura” del Estado por fuerza progresistas puede significar la captura de la izquierda... por las fuerzas del Estado profundo, su burocracia y los intereses capitalistas que representa; visto así la estrategia de la toma del poder para cambiar el mundo puede terminar en una izquierda tomada por el poder, cambiándolo todo para conservar lo principal del mundo actual como tal. Para el escritor uruguayo Raúl Zibechi: *«En la medida que el ciclo progresista latinoamericano se está terminando, parece el momento adecuado para comenzar a trazar balances de largo aliento, que no se detengan en las coyunturas o en datos secundarios, para irnos acercando a diseñar un panorama de conjunto. De más está decir que este fin de ciclo está siendo desastroso para los sectores populares y las personas de izquierda, nos llena de incertidumbres y zozobras por el futuro inmediato, por el corte derechista y represivo que deberemos afrontar».* [6]

¿Fin de ciclo?

En las últimas semanas una avalancha de artículos de opinión –varios de los cuales ya hemos publicados en Rebelion.org- debaten de la existencia o no de un “fin de ciclo” progresista, incluso de la existencia de tal “ciclo”, este debate llegando a tal nivel de polarización que unos autores acusan a los otros de hacerle el juego al imperio por ser “diagnosticadores de la capitulación” e “izquierdistas de café” (dixit García Linera), cuando los segundos tildan a los primeros de haberse convertidos en intelectuales por encargo y acrílicos al servicio de los Estados de la región y de gobiernos ya no progresivos si no que regresivos... Este diálogo de sordos poco aporta para desentrañar el momento político actual. Seguramente, las ideas en torno a posible “reflujo del cambio de época” [7] o, desde una óptica contraria, la idea de un paulatino “fin de la

hegemonía progresista” [8] son seguramente más exactas y complejizadas para comenzar a dar esta discusión de manera constructiva aunque conflictiva. Todo eso reconociendo que este fenómeno se da en condiciones territoriales-nacionales altamente diferenciadas:

«Este deslizamiento es más perceptible en algunos países (por ejemplo Argentina, Brasil y Ecuador) que en otros (Venezuela, Bolivia y Uruguay) ya que en estos últimos se mantienen relativamente compactos los bloques de poder progresistas y no se abrieron fuertes clivajes hacia la izquierda. En particular, Venezuela fue el único país en donde se impulsó la participación generalizada de las clases subalternas con la conformación de las Comunas a partir de 2009 ...» [9]

Más allá de la polémica acerca de la dimensión del agotamiento, inflexión o reflujo del periodo en curso, y subrayando la variedad de los procesos analizados, surge que en muchos planos los progresismos gubernamentales parecen haber optado definitivamente, bajo la presión de actores globales como endógenos, por un “realismo modernizador” y la política de la “medida de lo posible”, lo que es a menudo el mejor derrotero para justificar la renuncia a cambios estructurales en una dirección anticapitalista: una dinámica que podría ser simbolizada por el encuentro (julio 2015) “fraternal” entre la presidenta brasilera Dilma Rousseff –militante del Partido de los Trabajadores– y el criminal de lesa humanidad Henri Kissinger (ex secretario de Estado de EEUU), en un momento en que Dilma buscaba un respaldo político imperial frente a una oposición en alza en el seno de la sociedad civil y a una derecha revitalizada por la amplitud de los casos de corrupción en filas oficialistas. Por cierto, el objetivo del ejecutivo de la principal potencia latinoamericana con este tipo de gestos diplomáticos es, ante todo, dar un respaldo a “sus” sectores dominantes y otorgar más “seguridad” para los negocios en Brasil. Desde otra trinchera y otra latitud, el tratado de libre comercio encubierto firmado en 2014 por Ecuador con la Unión Europea recuerda los límites de los anuncios sobre el “fin de la noche neoliberal”, incluso por parte de uno de los gobiernos paragones de esta perspectiva. Hoy, el gobierno Correa enfrentado con la derecha y denunciando los peligros de un “golpe blando” se muestra también en conflicto con movimientos sociales e indígenas (y con una aun débil izquierda), hasta tal punto que según Jeffrey Webber se podría hablar de una situación de “impasse político”, en el sentido desarrollado por el marxista Agustín Cueva, donde la figura

cesarista del presidente juega un papel de estabilizador funcional al capital:

«Ha habido momentos recurrentes en la historia de Ecuador donde la intensidad de los conflictos horizontales, intercapitalistas, en combinación con las luchas verticales entre las clases dominantes y populares, resultaban demasiado como para ser soportadas por las formas existentes de dominación. Entre medias, mientras los políticos buscaban nuevas formas más estables de dominación, reinaba la inestabilidad hasta alcanzar un impasse». [10]

La herencia maldita extractivista

De manera más general, es necesario mencionar, aunque no sea el único problema, la permanencia en todos los países progresistas de un modelo productivo y de acumulación donde se entrelazan, siguiendo varios grados e intensidades, capitalismo de Estado, neodesarrollismo y extractivismo de recursos primarios o energéticos, con sus efectos depredadores sobre comunidades indígenas, trabajadores y ecosistemas... Esa tensión endógena se articula, de manera desigual y combinada, con un contexto financiero globalizado feroz y el hecho central de la actual coyuntura: la crisis económica que ya golpea fuertemente a la región, provocando una brusca caída del precio de las materias primas y en particular del barril de petróleo (que pasó de casi 150 dólares a menos de 50), terminando así con el periodo anterior de bonanzas y desnudando de nuevo la matriz productiva dependiente y neocolonial de América latina, herencia maldita de siglos de sometimiento imperialista. Este contexto corresponde a la vez a con una clara ofensiva del capital transnacional, de Estados del Norte y de algunos gigantes del Sur (comenzando por China) para acaparar más tierras agrícolas, energía, minerales, agua, biodiversidad, mano de obra, en una vorágine que pareciera sin fin... hasta las últimas gotas de vida. En países como Bolivia o Ecuador donde hay más conciencia política de estos peligros, se defiende desde el gobierno y sus apoyos políticos la táctica –bastante sensata– de pasar por un necesario momento industrializador-extractivista para construir la transición con algo de fuerza económica: eso es algo como un “extractivismo transitorio posneoliberal” que permitiría desarrollar pequeños países con pocos recursos, crear riquezas de acumulación originaria para responder a la inmensa urgencia social que conocen esas naciones empobrecidas y a la vez debutar un lento proceso cambio del modelo de

acumulación. No obstante, según Eduardo Gudynas, secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES):

«No hay ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo por varias razones: la primera es que la forma en que se usa la riqueza generada por el extractivismo en buena parte se destina a programas que profundizan más el extractivismo, por ejemplo, aumentar las reservas de hidrocarburos o alentar la exploración minera. Segundo, los extractivismos tienen derrames económicos que inhiben procesos de autonomía en otros sectores productivos, tanto en la agricultura como en la industria. El Gobierno tendría que tomar medidas de precaución para evitar esa deformación y eso no está ocurriendo, de hecho hay una deriva agrícola a promover cultivos de exportación mientras se aumenta la importación de alimentos. Tercero, como los proyectos extractivos generan tanta resistencia social (ejemplos recientes son el de los Guaranís de Yategrenda, Santa Cruz, o la reserva Yasuni en Ecuador), los gobiernos tienen que defenderlos de forma tan intensa que refuerzan la cultura extractivista en amplios sectores de la sociedad y por tanto inhiben la búsqueda de alternativas». [11]

De hecho, no es una casualidad que el ciclo de luchas populares y movilizaciones que está emergiendo en el corazón de América, anunciando –tal vez– un nuevo periodo histórico de luchas de clases, esté directamente ligado a estas depredaciones, represiones y sus consiguientes resistencias socio-territoriales:

«La resistencia está centrada en la minería y los monocultivos, en particular la soja, así como en la especulación urbana, o sea en los diversos modos que asume el extractivismo. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en la región hay 197 conflictos activos por la minería que afectan a 296 comunidades. Perú y Chile, con 34 conflictos cada uno, seguidos de Brasil, México y Argentina, son los países más afectados». [12]

Crisis económica mundial y nuevas luchas populares

Esta tendencia se manifiesta en el contexto ya descrito de fuertes sombras en relación al crecimiento económico de los últimos años, la profunda crisis del capitalismo mundial que sigue su curso y la permanencia de inmensas desigualdades sociales y asimetrías regionales en todo el continente. Por otra parte, es menester subrayar la importante ofensiva de las diversas

derechas empresariales y mediáticas como también de las oligarquías de la región que aprovechan el fin de la hegemonía progresista para retomar el terreno perdido desde hace 15 años frente a los diferentes líderes carismáticos y dirigentes progresistas. Esas derechas conservadoras y neoliberales siguen controlando –en el plano político– ciudades, regiones y países claves (como México y Colombia), amenazando de manera constante los derechos arrancados en la última década y el proceso de nueva integración regional más autónoma de Washington. Sabemos que estas fuerzas regresivas se mostraron, y se muestran, listas para organizar múltiples formas de desestabilización, e incluso golpes de Estado (como lo fue en la última década en Paraguay, Honduras, Venezuela), con el apoyo explícito o indirecto de la agenda imperial de EEUU. [13] Sin embargo, desde abajo, protestas populares multisectoriales, pueblos originarios, estudiantes y trabajadores ponen también en el tapete sus propias agendas y reivindicaciones, realzando los límites de las transformaciones de fondo realizadas en países donde gobiernan fuerzas “posneoliberales” y su absoluta ausencia donde todavía dominan las derechas neoliberales, denunciando las diversas formas de represión, intimidación o cooptación en ambos casos: oposición colectiva a la soja transgénica o huelgas obreras en Argentina; grandes movilizaciones callejeras de la juventud en las principales ciudades brasileñas demandando el derecho a la ciudad y contra la corrupción; crisis profunda del proyecto bolivariano, violencia de la oposición y reorganización del movimiento popular en Venezuela; en Perú, luchas campesinas e indígenas en contra de megaproyectos mineros (como el proyecto Conga); en Chile, Mapuche, asalariados y estudiantes denunciando con fuerza la herencia maldita de la dictadura de Pinochet; en Bolivia, críticas de la Central Obrera Boliviana y de sectores del movimiento indígena hacia la política de “modernización” de Evo Morales; en Ecuador, abandono por parte del presidente Correa del proyecto Yasuní que debía dejar el petróleo bajo tierra y enfrentamiento entre el ejecutivo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y franjas significativas de la sociedad civil organizada; en Colombia, una larga búsqueda de una paz verdadera, es decir una paz con transformación social, económica y reforma agraria, etc.

El topo de la historia y las alternativas

El escenario es tenso y movedizo. Pero, a pesar de todo el “viejo topo de la historia” (en el sentido

que lo entendía Marx) sigue cavando y junto con él se despliegan una gran variedad de experiencias de luchas sociales, conflictos de clases y debates políticos acompañados de múltiples ejercicios de poder popular, alternativas radicales y utopías en construcción. [14] Si algunos intelectuales críticos pudieron creer –y hacer creer–, durante un tiempo, que América Latina –o mejor dicho Abya Yala– alcanzaría el nuevo El Dorado del “socialismo del siglo xxi” gracias a un “giro a la izquierda” gubernamental y victorias electorales democráticas, sabemos que los caminos de la emancipación son más complejos, profundamente sinuosos y que los aparatos de poder (militares, mediáticos, económicos) de las oligarquías latinoamericanas e imperiales son sólidos, resilientes, enquistados, e incluso feroces cuando es necesario. Transformar las relaciones sociales de producción y desbaratar las dominaciones de “raza” y de género en las sociedades de Nuestra América es una dialéctica que tendrá que partir, sin duda y de nuevo, desde abajo y a la izquierda, desde la autonomía y la independencia de clase, pero siempre en clave política, y no desde un ilusorio cambio sin tomar el poder. Eso es sin negar que estos intentos colectivos de poder popular deban continuar apoyándose en avances electorales parciales o puedan considerar la importancia de conquistar espacios institucionales y partidarios dentro del Estado, si –y solo si– el desarrollo de tales nuevas políticas públicas se ponen al servicio de los “comunes” y de los subalternos. ¿Se puede utilizar el Estado para terminar con el Estado... capitalista, usándolo un tiempo como barrera de contención de colosales fuerzas hostiles ajenas? ¿o, como lo constató Marx, el Estado por ser fundamentalmente criatura de los dominantes no puede ser herramienta nuestra sin arriesgar colonizarnos, mente, alma y practicas? Es evidente que el control del ejecutivo representa “sólo” la conquista de un poder parcial, y aún más limitado si no se posee mayoría parlamentaria y una base social movilizada [15] : recordemos las lecciones de Chile y de cómo se derrotó en 1973 a Salvador Allende y la vía institucional al socialismo de la Unidad Popular... Por eso un gobierno de izquierda y de los pueblos, muestra su verdadero carácter alternativo cuando sirve de palanca y estímulo para las luchas auto-organizadas de los trabajadores y de los movimientos populares o indígenas, favoreciendo dinámicas de empoderamiento real, transformación de la relaciones sociales de producción, construcción de autogestión y caminos emancipatorios desde y para el “bien

vivir”. En el caso contrario, las fuerzas políticas de izquierda están condenadas a gestionar el orden existente, e incluso en momento de inestabilidad a elevarse por encima de la clases sociales de manera bonapartista para perpetuar el leviatán estatal, administrando la dominación de manera más o menos “progresista”, con más o menos roces con las elites locales.

Sin duda, la inflexión y dudas actuales representan peligros y oportunidades; es también el momento de volver a discutir lo nuevo sin olvidar lo “viejo” y debatir sobre las estrategias anticapitalistas y sus herramientas políticas para construir lo que proponemos llamar un ecosocialismo nuestroamericano del siglo xxi : un proyecto que no sea calco ni copia, que rechace dejar agobiarse por las tácticas electorales cortoplacistas, por las luchas de caudillos y de aparatos burocráticos, pero sin tampoco aceptar el arrastre y la ilusión de la construcción de una pluralidad de autonomías sociales sin proyecto político común, un mínimo centralizado. Con este propósito, es fundamental abrir los ojos, el olfato, los sentidos y los corazones a los experimentaciones colectivas en curso, a menudo existentes por debajo y por encima de los radares mediáticos consensuales, sin duda todavía dispersas o pocos conectadas, pero que conforman una inmenso rio de luchas en permanente transformación, desde lo real y lo concreto, desde sus errores y aciertos.

Experiencias que permiten entender dinámicas emancipadoras, tentativas originales colectivas y los peligros que deben enfrentar o sortear. Por cierto, no nos permiten mostrar una forma ideal de tentativas de sublevación exitosas, sino más bien un mosaico de praxis-saberes-accionares: algunas centradas desde el campo-agrario y lo territorial, otras más desde lo productivo y las fábricas recuperadas, otras desde lo barrial y comunitario urbano, otras también iniciadas desde políticas estatales o institucionales pero controladas por sus usuarios: luchas de las mujeres en contra de la violencia patriarcal, de los sin techo, de los indígenas, de la clase obrera en varios países, ejemplo de la agroecología alternativa en Colombia, de los reclamos de “bien vivir” en Ecuador, de los consejos comunales en Venezuela, de la fábricas sin patrones en Argentina, de los medios comunitarios en Brasil y Chile, de las rondas comunitarias en Perú y México, etc.

«Iniciativas organizativas locales de toma y ejercicio de poder popular, virulentas protestas callejeras de rechazo a decisiones orquestadas desde el poder nacional y transnacional; pero

también, asambleas constituyentes de refundación utópica, recuperación de las riendas de la política por parte de los Estados: los caminos de la emancipación están lejos de ser unívocos. En tanto experimentaciones, suponen ensayos, titubeos y repliegues. Pero también, conquistas. Complejas, a veces contradictorias, pero profunda y sinceramente esperanzadoras, experiencias (que) constituyen un alimento para quienes participan en la tarea de reinventar las sociedades y la manera de hacer política, sean estos ciudadanos de los países de la región o mujeres y hombres que han emprendido el esforzado camino de la resistencia y la emancipación, desde otras geografías». [16]

Esa pluralidad de voces y de ejemplos posibilita retomar el hilo de una discusión que ya recorre las venas abiertas del continente; permite pensar más allá y más acá de proyectos progresistas gubernamentales, asumiendo que es, al mismo tiempo, indispensable crear frentes socio-políticos para enfrentar las amenazas del regreso masivo de las derechas y del imperialismo en Suramérica. Sobre todo, nos obliga a pensar a contracorriente, en contra de una “izquierda contemplativa, institucional, administrativa, una izquierda de aspirantes a funcionarios y funcionarias, una izquierda sin rebeldía, sin mística, una izquierda sin izquierda”. [17] Y también saber pensar en contra de nuestros propios mitos desarrollistas y teleológicos, asumiendo la urgencia global de un planeta maltratado al borde del colapso ecológico y climático. Por cierto, es esencial reconocer que estas diversas experiencias y vivencias que mencionamos aquí brevemente sobre cómo cambiar el mundo son contradictorias, incluso divergentes: algunas aisladas, muy localizadas y otras, al contrario, institucionalizadas o dependientes del Estado. De allí el interés de retomar los grandes debates estratégicos del siglo XX, pero desde los tiempos actuales y con en memoria los balances de las dolorosas derrotas pasadas: ¿Cómo emprender una transición poscapitalista y ecosocialista en el siglo XXI? ¿Cuáles serán el papel de las herramientas político-partidarias y de los movimientos en este tránsito? ¿Qué papel de las fuerzas armadas, del sistema parlamentario, de los sindicatos? Destruirlos, utilizarlos, transformarlos, evitarlos, fisurarlos... muy bien, pero en cualquier caso: ¿cómo? ¿Y de qué manera reconstruir sentidos comunes, hegemonía cultural y una izquierda anticapitalista desde y para el pueblo? ¿Cómo evitar forjar ilusiones en torno a pequeños grupos de afinidades cerrados sobre ellos mismos y, al

mismo tiempo, no repetir el horror burocrático y estadocéntrico del siglo XX?

Ecosocialismo o Barbarie

La gran Rosa Luxemburgo advertía, en 1915, “avance al socialismo o regresión a la barbarie”. En 2015, sus palabras cobran un sentido aún más catastrófico y premonitorio: “avance al ecosocialismo o ecocidio global” [18]. Sin dudas, es desde la “osadía de lo nuevo” que podremos volver a soñar en derribar los muros del capital, del trabajo asalariado, del neocolonialismo y del patriarcado:

«Cambiar el mundo suena muy ambicioso. Es más, parece bastante arriesgado si se toma en cuenta todos los grupos de poder que jamás permitirían que se desmonte la civilización capitalista. Pero en las actuales circunstancias, no hay otra alternativa. Las condiciones de vida de amplios segmentos de la población y de la Tierra misma, se deterioran aceleradamente. Nos acercamos a un punto sin retorno. Y la opción de cambiar de planeta no existe. (...) Debemos aceptar el desafío. Debemos ser rebeldes ante el poder (y quizá hasta desear su destrucción). Debemos aceptar nuestras limitaciones como seres humanos dentro de la Naturaleza. Debemos odiar toda forma de explotación. Debemos ser quienes nos levantemos contra las injusticias y contra quienes las cometan. No debemos resignarnos. Tenemos que seguir exigiendo y construyendo lo imposible». [19]

La tarea ya comenzó, es pan de hoy día y seguirá mañana.

Santiago de Chile, primavera austral 2015

Notas

[1] Tales como la construcción de Estados plurinacionales, la instalación de derechos sociales más o menos institucionalizados, la creación de asambleas constituyentes y de espacios de participación comunitaria o el impulso integracionista regional.

[2] García Linera, Álvaro, Las tensiones creativas de la Revolución. La quinta fase del Proceso de Cambio, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011.

En: www.rebellion.org/docs/134332.pdf.

[3] Emir Sader, “¿El final de un ciclo (que no existió)?”, Pagina 12, Buenos Aires, 17 de septiembre de 2015 y Marta Harnecker, “Los movimientos sociales y sus nuevos roles frente a

los gobiernos progresistas”, *Rebelión*, 07-09-2015, <http://rebelion.org/noticia.php?id=...>

[4] Es necesario anotar aquí que, para nosotros, el actual gobierno chileno de Michelle Bachelet se sitúa claramente fuera de esta categoría “progresista posneoliberal suramericana” por ser fundamentalmente una continuidad “reformista” del neoliberalismo de los gobiernos de la Concertación que dirigieron el país entre 1990 y 2010. Cf. F. Gaudichaud, *Las fisuras del neoliberalismo. Trabajo, “Democracia protegida” y conflictos de clases*, Buenos Aires, CLACSO, abril 2015. En: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/cla...>

[5] Modenesi, Massimo, “Revoluciones pasivas en América Latina. Una aproximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas de inicio de siglo”. En: Modenesi, Massimo (coord.), *Horizontes gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci*, México, fcp y s-unam, 2013.

[6] Zibechi, Raúl, «Hacer balance del progresismo», *Resumen latinoamericano*, 4 de agosto del 2015.

En: www.resumenlatinoamericano.org/2015...

[7] Katu Akornada, “¿Fin del ciclo progresista o reflujos del cambio de época en América Latina? 7 tesis para el debate”, *Rebelión*, 8 de septiembre del 2015, www.rebelion.org/noticia.php?id=203029.

[8] Massimo Modenesi, “¿Fin del ciclo o fin de la hegemonía progresista en América Latina?”, *La Jornada*, 27 de septiembre del 2015.

[9] Massimo Modenesi, “¿Fin del ciclo o fin de la hegemonía progresista en América Latina?”, op. cit.

[10] Jeffery R. Webber, “Ecuador en el impasse político”, *Viento Sur*, 20 de septiembre de 2015, <http://vientosur.info/spip.php?arti...>

[11] Ricardo Aguilar Agramont, “Entrevista a Eduardo Gudynas: La derecha y la izquierda no entienden a la naturaleza”, *La Razón*, 23 de agosto de 2015.

[12] Zibechi, Raúl, “Hacia un nuevo ciclo de luchas en América Latina”, *Gara*, 3 de noviembre del 2013, <http://gara.naiz.info/paperezkoa/20...>

[13] Franck Gaudichaud, “El peso de la historia. América Latina y la mano negra de Washington”, *Le Monde Diplomatique*, edición chilena, julio de 2015.

[14] Pablo Seguel, “América Latina actual. Geopolítica imperial, progresismos gubernamentales y estrategias de poder popular constituyente. Conversación con Franck Gaudichaud”. En: *gesp* (coord), *Movimientos sociales y poder popular en Chile*, Tiempo robado editoras, Santiago, 2015, pp. 237-278. En línea:

parte 1: <http://rebelion.org/noticia.php?id=...> y parte 2: <http://rebelion.org/noticia.php?id=...>

[15] Cf. Marta Harnecker, “Los movimientos sociales y sus nuevos roles...”, op. cit.

[16] Tamia Vercoutère, prólogo a la edición ecuatoriana del libro *América Latina. Emancipaciones en construcción* (Quitogo, IEAN, 2013).

[17] Pablo Rojas Robledo, “Hay que sembrarse en las experiencias del pueblo”. *Fin de ciclo, progresismo e izquierda. Entrevista con Miguel Mazzeo*, *Contrahegemonía*, septiembre 2015, <http://contrahegemoniaweb.com.ar/ha...>

[18] Sobre la noción de Ecosocialismo, tal cual como la entendemos: <http://www.democraciasocialista.org...>

[19] Miriam Lang, Belén Cevallos y Claudia López (comp.), *La osadía de lo nuevo. Alternativas de política económica*, Quito, Fundación Rosa Luxemburg/Abya-Yala, 2015, pp. 191-192

**Ante la crisis social y política nicaragüense –
¡Solidaridad con las reivindicaciones populares
y contra la represión orteguista!** (Declaración
del Buró Ejecutivo de la IV Internacional)

De la Revolución Popular Sandinista

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) nació como una “Organización de Vanguardia”, de planteamientos antiimperialistas y revolucionarios, como lo establece su Programa Histórico (1969), “capaz de lograr [...] la toma del poder político y el establecimiento de un sistema social que liquide la explotación y la miseria del pueblo nicaragüense”.

Cuando se derrota a la dictadura de Somoza en julio de 1979, el FSLN contaba con un amplio respaldo de las mayorías sociales e intentó sentar las bases objetivas y subjetivas de un proyecto revolucionario de carácter socialista, no sin grandes desafíos que enfrentar en un país de una economía altamente dependiente y una profunda desestructuración social, sin mencionar la contrarrevolución que Estados Unidos promovería en los 80 y que sería determinante en esta etapa del sandinismo. La Cuarta Internacional inmediatamente celebró el derrocamiento de dicha dictadura y se implicó a fondo en la solidaridad con el movimiento revolucionario popular.

Conscientes de que las transformaciones económicas y sociales radicales serían paulatinas, el FSLN impulsó una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional donde estaba representado el bloque sandinista y la burguesía. Se proclamó pues, que los principios de la revolución eran la economía mixta, el pluralismo político y el no alineamiento, como las estrategias necesarias en el corto plazo.

En el largo plazo, el Programa Histórico del FSLN sería el marco general a desarrollar, si bien no se realizó en su totalidad, dejando deudas importantes con respecto a la emancipación de las mujeres (en particular, dejando intactas las leyes restrictivas de aborto que sólo permitían la interrupción del embarazo si la vida de la mujer estaba en peligro) o las reivindicaciones del campesinado, así como errores gravísimos como el respetar la deuda externa contraída por el somocismo y la aplicación de políticas monetaristas a finales de los años 80. No obstante, a partir de 1988, los líderes

sandinistas introdujeron un ajuste estructural que degradó las condiciones de los pobres sin afectar a los ricos. Estas políticas se parecían mucho a las condiciones que habitualmente impone el FMI y el Banco Mundial mientras, al mismo tiempo, bajo la presión de Washington, ambas instituciones habían suspendido su ayuda a las autoridades sandinistas. Dichas políticas de ajuste fueron muy criticadas por ciertas tendencias en el seno del FSLN, ya que cargaban sobre las espaldas de las clases populares el esfuerzo del ajuste.

De todos modos, el Programa sí incluía la construcción de un Gobierno Revolucionario que permitiese la plena participación de todo el pueblo, tanto a nivel nacional como a nivel local, el respeto a los derechos humanos, la libertad para organizar el movimiento obrero-sindical en la ciudad y el campo, libertad para organizar agrupaciones campesinas, juveniles, estudiantiles, de mujeres, etc. Se expropiaron latifundios, se redistribuyó la tierra y se formaron sindicatos y asociaciones campesinas. También hubo nacionalización de fábricas, edificios y demás activos de la oligarquía somocista.

Durante los once años siguientes, se generalizó la enseñanza, se abrió la universidad a las clases populares, se crearon programas de atención social y se puso en marcha un sistema de salud de carácter universal y otros servicios básicos y se lanzaron Comités de Defensa Sandinista (CDS) para organizar a la población de los barrios.

El FSLN también establecía una política tributaria justa, derechos laborales y justicia social histórica para la Costa Caribe, en razón de la explotación y discriminación para con los pueblos indígenas originarios. Se trataba pues, de un programa hacia el socialismo que preparaba las condiciones materiales para ello, con planteamientos tácticos y estratégicos, que, a pesar de las dificultades del contexto y la amenaza del imperialismo estadounidense, abría nuevas promesas de ruptura con el sistema hegemónico.

Sin embargo, la reforma agraria no fue suficientemente lejos: las expropiaciones se centraron principalmente en los activos de la familia Somoza y sus aliados, y salvaguardó los intereses de los principales grupos capitalistas y las familias más poderosas, que ciertos líderes sandinistas querían convertir en aliadas o compañeras de viaje. Además, en lugar de dar prioridad a explotaciones pequeñas y medianas, el

FSLN rápidamente creó un sector agrario de cooperativas estatales, que no concordaba con las actitudes de la población rural, partes de la cual fueron atraídas por los contrarrevolucionarios de la Contra.

La autoorganización y el control obrero no se fomentaron lo suficiente. Parte de la dirección del FSLN se había formado en Cuba en los años 60 y 70, lo cual, bajo la influencia de la Unión Soviética estalinizada, estaba promoviendo unas organizaciones populares en marcos muy controlados y limitados. Como resultado de ello, las masas no pudieron participar plenamente en su emancipación.

La traición al Programa Histórico del FSLN y el establecimiento de un régimen corporativista autoritario

Cuando el FSLN fue derrotado electoralmente en 1990, la nueva situación internacional favorecía a la derecha, la restauración capitalista en Europa del Este dejó a Nicaragua sin aliados internacionales. Pero también empezaba a cundir cierto desánimo por el rumbo que estaba tomando el proceso revolucionario. En las bases sandinistas había malestar por la burocratización y el verticalismo de la Dirección Nacional del FSLN, quienes elegían a los miembros de los CDS, cargos sindicales, cuadros territoriales y mandos intermedios. Progresivamente, la ausencia de democratización en estos órganos conllevó al desarrollo de una dirección sandinista burocratizada que gozaba de privilegios que contrastaban con la realidad de las grandes mayorías a quienes se le pedían sacrificios económicos y sociales en nombre de la revolución.

Cuando los principales comandantes de la Dirección Nacional, cargos públicos y cuadros medios se apoderaron de tierras, cafetales, mansiones, haciendas, automóviles y otras propiedades del Estado que, la revolución recuperó en nombre de las grandes mayorías —en lo que popularmente se conoce como “la piñata”—, este malestar se profundizaría. Los argumentos presentados por la comandancia era el evitar que el enemigo se adueñase de lo que tanta sangre había costado, pero esto no fue suficiente para explicar ante la población el enriquecimiento personal de la entonces incipiente burguesía sandinista.

Posteriormente, bajo Daniel Ortega el FSLN

adoptó una actitud que osciló entre el compromiso y la confrontación ante el gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) de Violeta Chamorro. El Directorio Nacional del FSLN, controlado mayoritariamente por la corriente Izquierda Democrática de Daniel Ortega, alentaba las luchas contra las privatizaciones, por un lado, mientras en la Asamblea Nacional apoyaba al gobierno de Chamorro que las llevaba a cabo, por el otro.

A finales de los años 90, Ortega pactó con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán, quien era presidente desde 1997, en una suerte de coexistencia con la derecha más conservadora y corrupta. Éstas eran “amistades peligrosas” para un proyecto revolucionario. No obstante, fueron beneficiosas para el FSLN de Daniel Ortega y para el PLC de Alemán, quienes habían obtenido distintos beneficios de tales pactos. Ello se vio con el apoyo a Ortega por parte del PLC ante la denuncia de abuso sexual de su hijastra Zoilamérica Narváez. Y, años más tarde, cuando a Alemán, quien había sido sentenciado a 20 años de cárcel por corrupción galopante de su gobierno, se le permitió cumplir su condena bajo arresto domiciliario gracias a los hombres que Ortega había colocado en el poder judicial, hasta que el Tribunal Supremo anuló la pena en 2009 durante la presidencia de Ortega.

La reforma a la Ley electoral del año 2000, promovida por diputados sandinistas y liberales también fue otro producto del pacto Ortega – Alemán. La reforma permitió que la presidencia y vicepresidencia de la República se obtuviese con un mínimo del 35% y que superaran a los candidatos del segundo lugar por una diferencia de cinco puntos porcentuales. Esta Ley Electoral permitió a Daniel Ortega, quien carecía de apoyo electoral suficiente desde 1990, ser elegido en 2006 con el 38,07% de los votos.

Estando en la oposición, el grupo parlamentario sandinista votó en 2006, de acuerdo con los diputados conservadores, una ley que prohíbe completamente el aborto. Lo hicieron como parte del pacto con la derecha que les permitió volver a la presidencia de la república a finales de 2006. Y fue bajo la presidencia de Daniel Ortega —quien se negó a derogar la ley— cuando dicha prohibición fue incluida en el nuevo código penal que entró en vigor en 2008. Esta prohibición no permite ninguna excepción, ni tan siquiera cuando la salud o la vida de la mujer embarazada corre peligro, o cuando el embarazo es resultado de una

violación.

Este movimiento acompañó el progreso experimentado en la consolidación de otras amistades peligrosas: esta vez, con un antiguo adversario del FSLN, el Cardenal Miguel Obando y Bravo, a quien Ortega reincorporó a la vida pública como Presidente de la Comisión de Reconciliación, Paz y Justicia, una instancia que velaría por el cumplimiento de los acuerdos para con los desmovilizados de guerra. Aquí se iniciaría otra relación de prebendas entre el FSLN de Ortega y los poderes fácticos. Con el fin de ganar los votos de los conservadores, Daniel Ortega se casó con Rosario Murillo en la iglesia antes de las elecciones de noviembre de 2006, con el cardenal Obando oficiando el acto.

También fue a partir del regreso de Ortega al gobierno que el FSLN formalizó los acuerdos con el COSEP, estableciendo una alianza entre estos dos sectores, presentada como un espacio de concertación tripartita, entre gobierno, el sector privado y los sindicatos. No obstante, la participación de los sindicatos sería testimonial, ya que han sido cooptados por los intereses de partido del FSLN, es decir, de los Ortega-Murillo, como han evidenciado los posicionamientos de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) en casos de luchas de los trabajadores frente a grandes empresarios como la familia Pellas o ante los acuerdos sobre el salario mínimo. Así, poco a poco, desde la formulación de leyes hasta las negociaciones salariales, la economía política nicaragüense estaría supeditada los intereses del gran capital nacional. No obstante, un pacto de esta naturaleza, no puede restringirse al gran capital nacional, pues su propia dinámica lleva al capital transnacional, en particular a la industria extractivista y, sobre todo, a la minería. En todo ello subyace la lógica neoliberal imperante en la región: la canalización de recursos públicos a inversiones privadas, la externalización y privatización de servicios, exenciones y beneficios fiscales para el capital, etc.

El tratado de libre comercio con los Estados Unidos fue adoptado en 2005. Si el grupo parlamentario del FSLN, entonces en la oposición, votó en contra de su ratificación en octubre de 2005, luego en 2006, los parlamentarios del FSLN apoyaron a cambios en una serie de leyes que permitían confirmar las condiciones impuestas por EE.UU. Además una vez en el poder a partir de 2007, el gobierno de Daniel Ortega no intentó en

absoluto derogar este acuerdo de libre comercio con la superpotencia estadounidense. Esto constituyó un giro más en la orientación del FSLN pues, anteriormente, había acusado al gobierno del presidente Enrique Bolaños de someter Nicaragua a los intereses económicos de Washington. Otros tratados de libre comercio fueron aprobados con el apoyo del FSLN: un tratado con Taiwán (que entró en vigor en 2008), uno que concierne a América Central con México (2011) y otro entre América Central y la Unión Europea (2012).

En 2006, Nicaragua era beneficiaria de un alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados –el FMI canceló 206 millones de dólares de la deuda nicaragüense. Cuando Ortega volvió al gobierno en 2007, el programa FMI ya se había terminado y el Fondo no vio necesidad alguna de firmar otro, ya que consideraba sostenible la deuda de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega insistió, no obstante, en implementar un nuevo programa con el fin de atraer inversores extranjeros. Finalmente el FMI aceptó, pidiendo al gobierno que profundizara las políticas neoliberales llevadas a cabo por la derecha y que aplicara una austeridad fiscal con el fin de obtener un superávit fiscal primario.

Por consiguiente, las instituciones de Bretton Woods no tienen nada que reprochar al gobierno nicaragüense. El FMI constata “el éxito que ha tenido Nicaragua en mantener la estabilidad macroeconómica” (marzo 2016). En la última visita de su personal técnico (febrero 2018), este organismo ha declarado que “el resultado económico de 2017 estaba por encima de las expectativas y que la perspectiva para 2018 era favorable”. En lo que respecta al Banco Mundial, eligió el momento preciso en abril de 2018 cuando el gobierno Ortega acababa de anunciar medidas neoliberales en relación con la Seguridad Social para felicitarle por sus acertadas políticas económicas. En otras palabras, Nicaragua ha funcionado dentro de las directrices que estos organismos imponen a la región.

Todo esto ha sido posible con un control mayoritario de la Asamblea por parte del FSLN. Además, en noviembre de 2013, Ortega introdujo una iniciativa de Ley de Reforma a la Constitución de la República, en la que se incluía la propuesta de elegir al Presidente con “mayoría relativa” de votos, independiente del porcentaje alcanzado, y permitir la reelección presidencial indefinida. Actualmente, el FSLN de Ortega tiene el control

absoluto de la Asamblea, con 71 diputados de un total de 92.

Pero quedan dos grandes traiciones del FSLN a su Programa Histórico que no pueden dejar de mencionarse. La primera, es la desmovilización y destrucción del tejido organizativo de base y de los grandes movimientos sociales, cooptados en su mayoría por el régimen. Esto se da a través de un control a distintos niveles, desde el normativo legal, con la eliminación de la elección por la suscripción popular y por el control ejercido a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que son formas verticales de organización que persiguen el control de los ciudadanos para los propósitos de poder de la pareja presidencial.

La otra traición es a los derechos humanos de las mujeres, que, con la prohibición total del aborto, la reforma de la ley de violencia machista, la persecución al movimiento feminista crítico con el régimen, la impunidad frente a años de abuso sexual a Zoilamérica, etc., está cuestionando todo el sistema político y social levantado en torno al Ortegaísmo. En 2012, después de una importante campaña de las organizaciones de base de mujeres que se remonta a la época de la revolución, Nicaragua introdujo la Ley 779 que actúa contra la violencia contra la mujer. En particular, eliminó el requisito anterior de mediación en los casos de abuso. Esta disposición fue el resultado de una campaña progresista, pero hubo también una campaña reaccionaria en su contra, impulsada por la jerarquía católica, que la calificó de "anti-familia". Esto resultó en que la ley fuera seriamente debilitada por la enmienda que reintroducía la mediación obligatoria 15 meses después de que fuera aprobada por primera vez, sin resistencia alguna por parte del FSLN

Frentes de lucha feminista y de base obrero-campesina. La represión estatal como respuesta.

Llegados a este punto, está demostrado que el Programa Histórico del FSLN, comprometido con los derechos e igualdad entre las personas, es contradictorio con la deriva tomada por el Ortegaísmo. Dentro de todas las frentes abiertos de lucha, han sido los movimientos de mujeres, críticos con el gobierno, quienes no han dado tregua en la denuncia sobre los cambios a la Ley 779, que reduce los feminicidios al ámbito de las relaciones de parejas heterosexuales o que incluye la mediación con agresores como mecanismo de

resolución de conflictos. Es decir, la ley fue vilipendiada, como lo son los cuerpos de las mujeres nicaragüenses expuestos a estas leyes o manifestándose en las calles por sus derechos.

Otros frentes se ubican en la lucha contra el extractivismo y hay distintos ejemplos de los conflictos entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida misma, derivado de la incompatibilidad que el extractivismo tiene como motor de un desarrollo que no beneficia a las grandes mayorías, ni a las comunidades que sufren sus efectos negativos, como se vio en Rancho Grande o Mina El Limón. En ambos casos, ante la organización comunitaria y la movilización, la respuesta ha sido la represión. Lo mismo sucede con proyectos mineros, hidroeléctricos y de agronegocios.

Pero, de todos estos proyectos que son una amenaza para las comunidades y el medio ambiente, hay uno que ha tenido una movilización generalizada, nacional e internacionalmente que Ortega no ha podido ocultar: se trata de la construcción de un canal interoceánico que propone partir en dos el país y la región, desde el mar Caribe hasta el Océano Pacífico, atravesando el Lago Cocibolca, principal reserva de agua dulce de Centroamérica. En este caso, la respuesta ha sido la persecución, represión y estigmatización de los movimientos sociales.

A la vista de todo lo anterior, el Gobierno, que sirve los intereses del capital privado (ya sea de propiedad capitalista local "tradicional", burocrática o extranjera), no solo actúa reprimiendo al pueblo a favor de las transnacionales, sino que también es cómplice de la destrucción del medio ambiente y culpable de violaciones generalizadas de los derechos humanos.

Abril 2018 y la movilización popular contra el régimen: el orteguismo cruza el Rubicón.

Once años han pasado ya desde el regreso de Ortega al gobierno, un tiempo en el que se ha acumulado el suficiente descontento social como para que dos acontecimientos detonasen el estallido de abril de 2018: la inacción del Gobierno frente al incendio de la Reserva de Indio Maíz y la propuesta de reforma del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS). Esta reforma recortaría el montante de las pensiones un 5%, limitaría la indexación de las pensiones en

relación con la tasa de inflación e introducido recortes en las pensiones futuras de aproximadamente un millón de asalariados que podrían llegar a alcanzar el 13%.

El estallido social se reflejó en la movilización en las calles de varias ciudades nicaragüenses e hizo colocar la mirada de la comunidad internacional en Nicaragua y el descontento popular contra el régimen.

El 18 de abril las manifestaciones y protestas surgieron espontáneamente y de forma pacífica en ciudades de referencia, como León o Managua y fueron inmediatamente repelidas de forma violenta por parte del Gobierno. Distintos informes de DDHH refieren a grupos organizados progubernamentales o “fuerzas de choque” reclutados desde las Juventudes Sandinistas, además de policías antidisturbios. Este uso desproporcionado de la violencia alimentó las protestas y las movilizaciones del 19 de Abril a través de los llamados “autoconvocados”: se trata de jóvenes, estudiantes, trabajadores, etc., que organizaron tomas de calles y ciudades a través de los “tranques” y que poco a poco se fueron extendiendo por el país a ciudades como Masaya, Granada, Matagalpa, Rivas y Estelí, sumando a otros colectivos y movimientos. Desde ese día, el gobierno de Ortega-Murillo ha continuado con la represión policial y militar y, en especial, con la actuación de grupos paramilitares, que han disparado indiscriminadamente a la población. Dichos grupos están enmascarados, fuertemente armados y operan con total impunidad, a plena luz del día y junto a las fuerzas policiales. Ello pone de relieve que actúan con total acuerdo del régimen.

El 22 de abril, dada la gran participación en las manifestaciones, Ortega canceló la reforma del INSS. El 24 de abril, el Gobierno accedió a iniciar un Diálogo Nacional con un grupo de manifestantes y otros actores bajo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compuesto por organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, campesinado e incluso el sector empresarial, y con la Iglesia Católica como mediadora, con el objetivo de resolver el conflicto. Entonces, los movimientos sociales ya tenían claro sus demandas para establecer el diálogo: no habría negociación sin el cese de la represión, la garantía de justicia y reparación por los manifestantes asesinados en los días anteriores y la salida del dúo Ortega-Murillo del poder, como un objetivo que

no era negociable. Desde la demanda de los movimientos sociales se trataba, pues, de negociar una transición post Ortega. No obstante, tras la insistencia sobre estos puntos, el Gobierno decidió suspender la mesa de diálogo. Para la movilización social, continuar la negociación en ese contexto hubiese significado un refuerzo del orteguismo y su régimen represivo.

Al mismo tiempo, se ha dado una rápida respuesta de las instituciones del Estado para legitimar la represión, por ejemplo, con la promulgación de la Ley Antiterrorista, que criminaliza y persigue a perfiles específicos de líderes y lideresas de los movimientos sociales. Miles de personas exiliadas y más de 400 personas muertas dan cuenta del punto sin retorno en el que ha derivado el régimen, que incluso ha llegado a expulsar a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la propia ONU. Tras el uso masivo del terror para reprimir e intimidar a la población, el gobierno recuperó el control de las calles a mediados de julio. Desde entonces, varios centenares de personas, tildadas de “terroristas” por el gobierno, han sido arrestadas y siguen en la cárcel, sin que se respeten sus derechos –no se permite a las asociaciones de defensa de los derechos humanos acercarse a las prisiones, ni a los abogados de algunos de los detenidos. Algunos de ellos han sido intimidados y torturados para que forzarles a dar falsas confesiones que confirmarían la afirmación de que el gobierno se enfrenta a un complot para ser derrocado por la fuerza.

Como resultado de la represión, amplios sectores de la población han sido suficientemente intimidados como para no tomar parte ya en manifestaciones callejeras. No obstante, se han organizado muchas manifestaciones, pero no han reunido a tantos participantes como en abril de 2018. Han sido organizadas y su diversidad es amplia: Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de Sociedad Civil, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Movimientos estudiantiles, Movimientos 19 de Abril (por todo el territorio nacional), organizaciones de base comunitaria, Madres de Abril, Comités de Presos Políticos, Movimientos de Mujeres y redes feministas, colectivos LGTBIQ, Universidad, sindicatos y asociaciones gremiales independientes... Pero hay un consenso en que Ortega y Murillo dejen el Gobierno y en la necesidad de reconstruir el sandinismo sin Ortega.

Pero todas estas organizaciones también están en contra de las injerencias externas que buscan una salida al conflicto para lograr un “Orteguismo sin Ortega”; es decir, el mantenimiento de una estructura clientelar que salvaguarde los intereses económicos del capital nacional y transnacional. De ahí que uno de los principales retos actuales de todos los movimientos sea el debate y los consensos de esa transición y hoja de ruta y que actores como el COSEP, actualmente clave para la salida de Ortega-Murillo, no suponga una amenaza para un proyecto social y económico emancipador.

En este punto sin retorno, el régimen se aprovecha de la retórica antiimperialista para presentar un intento de “golpe de Estado blando” como se ha dado en otros países de la región. El antiimperialismo ortodoxo actual queda reducido a una pantalla útil para legitimarse en la esfera internacional pero que reduce a injerencias externas un conflicto con profundas y complejas raíces en la realidad nacional. Internamente, beneficia sólo a un grupo de personas lo suficientemente privilegiadas como para no sufrir los peores reflejos del régimen que han construido en Nicaragua.

Pero Ortega y sus seguidores no pueden probar este supuesto intento de golpe de Estado. La mayor parte de las manifestaciones no han utilizado métodos terroristas. El gobierno no puede probar la implicación de mercenarios extranjeros. Ningún sector del ejército ha sido denunciado por Ortega por apoyar la idea de un golpe y, en último análisis, el ejército se ha mantenido del lado del régimen hasta el momento.

Ante los hechos aquí expuestos, es sencillamente falaz buscar las equivalencias de golpes de Estado blandos en el caso de Nicaragua. Es igualmente irresponsable defender que las movilizaciones actuales se reduzcan a hechos vandálicos de algunos grupos, o que los derechos humanos, y en especial de las mujeres, sean objetos de negociación o monedas de cambio para cualquier sociedad. Aún menos si cabe para una sociedad que un día aspiramos construir como izquierda revolucionaria. También es falaz presentar el gobierno de Ortega como un gobierno socialista o de izquierdas, dadas las políticas implementadas durante estos últimos once años a favor del capital –como muestra el apoyo del FMI, del Banco Mundial y del gran capital a Ortega, así como el apoyo de potencias capitalistas, el imperialismo

USA incluido, hasta que la represión se volvió demasiado fuerte como para seguir apoyando públicamente al régimen. Ningún pueblo tiene que conformarse con menos que las aspiraciones más nobles de libertades, democracia, justicia social y derechos humanos que haya alcanzado, en este caso, sintetizados en los ideales sandinistas. ¡La lógica del mal menor acaba siendo el camino más corto hacia el mal mayor!

Por todo ello, la IV Internacional, que se volcó desde el principio en la solidaridad con la Revolución sandinista, no duda en apoyar a los sectores de izquierdas y democráticos de la resistencia, la rebelión y el poder popular contra el actual régimen orteguista y en solidarizarse con los sectores que luchan por refundar un sandinismo anticapitalista, democrático y respetuoso de los derechos humanos que sea capaz de desembarazarse del despotismo neoliberal y represivo que está aplastando a las clases populares nicaragüenses.

¡Alto a la represión de los movimientos populares nicaragüenses! ¡Liberación inmediata de los presos políticos!

¡Por los derechos de las mujeres! ¡Aborto legal ya!

¡Abajo el régimen corrupto de Ortega-Murillo!.

Contra cualquier tipo de interferencia imperialista en los asuntos internos de Nicaragua! Por el derecho del pueblo de Nicaragua, Centroamérica y más allá de tomar su destino en sus propias manos!

¡Por la refundación sandinista! Hacia una alternativa ecosocialista al modelo extractivista exportador y el sistema capitalista, que implica una ruptura que requiere del mayor grado de democracia y autoorganización!

Articularemos estas reivindicaciones en una campaña internacional de solidaridad con las víctimas de la represión en Nicaragua.

Buró Ejecutivo de la IV Internacional

*28 de octubre 2018
Amsterdam*